

El Síndico pide «vigilancia específica y permanente» en la Avenida de Los Huetos

Exige al Ayuntamiento que «no mire a otro lado» tras recordar el robo registrado el sábado en la zona y que testigos atribuyen a los 'Bartolos'

■ MARÍA REGO

VITORIA. Un año da para mucho. Para momentos buenos y también para unos cuantos malos, como los que caen a diario en las manos del Síndico de Vitoria. En 2009 se tradujeron en un total de 1.733 incidencias atendidas en su oficina o, lo que es lo mismo, en la recepción de 700 quejas más que un ejercicio antes. Javier Otaola, Defensor del Vecino, hizo ayer balance de todas estas consultas durante la presentación de su memoria anual en el pleno del Ayuntamiento de la capital alavesa donde aprovechó, además, para solicitar su colaboración en un episodio concreto. Se trata de las «conductas antisociales graves» que se registran en los alrededores del número 68 de la Avenida de Los Huetos y que, según indicó, «afectan a la salubridad» del lugar -la parcela acumula numerosos desperdicios- así como a los «derechos» de los residentes, a las empresas y a los inmuebles cercanos.

En su intervención, en la que evitó acusar directamente a los miembros del clan de los 'Bartolos' -ni siquiera pronunció su nombre- que hasta hace apenas tres meses residían en esa vivienda, recomendó la puesta en marcha de «un programa de seguridad especial» para la zona. «El Ayuntamiento no debe mirar a otro lado», advirtió tras alabar la gestión del concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, en el caso. Otaola sí se refirió, en



El clan gitano abandonó el número 68 de Avenida de Los Huetos en marzo aunque algunos miembros han regresado hace unos días. ■ EL CORREO

MEMORIA 2009

► **1.733 incidencias.** El Síndico abrió 202 expedientes y, al cierre del informe, sólo quedaban 17 pendientes.

► **193 resoluciones.** Hubo 52 desestimaciones, 46 recomendaciones o 36 orientaciones.

► **Por barrios.** El Casco Viejo acumuló 20 quejas, el Ensanche, 18 y Lakua-Arriaga hasta 12.

► **Respuesta.** El Ayuntamiento aceptó el 70% de las resoluciones y rechazó un 22%.

cambio, al robo que se registró el pasado sábado en el interior de un chalé ubicado a escasos cien metros del número 68 y que algunos testigos relacionan con el regreso de varios integrantes de este grupo gitano al destrozado edificio. Sus inquilinos habían sido desplazados en marzo por diversos puntos de Vitoria aunque antes dejaron un reguero de «amenazas, injurias y agresiones» a ex vecinos y agentes policiales, aseguró. La situación obliga ya a crear un dispositivo de «vigilancia específica y permanente».

«Discreción»

Y es que el problema entró hace tiempo en el Consistorio. Juan Car-

los Alonso, teniente de alcalde, recordó que su equipo heredó esta «vieja herida que sigue supurando» y que necesita una solución que podría pasar, por ejemplo, por «implementar todas las medidas de seguridad», como una colaboración más estrecha entre Policía Local y Ertzaintza. Eso sí, el socialista optó por la «discreción» en el asunto para evitar que el trabajo hasta ahora realizado caiga en saco roto. Una labor que los populares solicitaron conocer en «una reunión privada y urgente» pues desde un encuentro celebrado el pasado febrero no han recibido ninguna noticia sobre el asunto, aseguró Javier Maroto. Por su parte, Antxon Belakortu, de EA,

avisó de que «la paciencia se ha acabado y cuando se acaba hay que actuar».

El área municipal de Seguridad Ciudadana ha sido precisamente uno de los que más resoluciones recibió en 2009 por parte del Síndico junto a Intervención Social, Urbanismo y Hacienda. En el informe del Defensor del Vecino recoge, sin embargo, una caída del 5% en el número de recomendaciones aceptadas por el Ayuntamiento, que dio el visto bueno a siete de cada diez consejos. Otaola podrá explicar estas y otras actuaciones en el segundo Encuentro Estatal de Defensorías Locales que se celebrará el próximo septiembre en Vitoria.



Casa asaltada el sábado en la calle Azucarera. ■ I. AIZPURU

Otaola afirma que «el proyecto de las casas tasadas de Ibaiondo ha sido un desastre»

■ F. GÓNGORA

VITORIA. El Síndico de Vitoria, Javier Otaola, denunció ayer durante la presentación de su memoria anual, el caso de la familia que llevaba cinco años de alquiler en un chalé adosado y tasado de Ibaiondo y cuando quiso hacer valer su contrato de opción de compra a precios oficiales -180.000 euros- el promotor le requirió la cantidad de 419.000 euros, una cifra del mercado libre. «El resultado de la venta de viviendas tasadas en Ibaiondo fue desastroso desde el punto de vista de la finalidad social. No se cumplió. Los promotores pudieron venderlas sin cortapisas a parientes, amigos y bienhechores, a personas que tenían vi-

vienda o incluso dejarlos vacíos esperando a que pudieran ser vendidas como libres», añadió.

El portavoz popular, Javier Maroto, aseguró que no era tanto un problema de la normativa como de su control y añadió que se había puesto por escrito «la burla que se estaba cometiendo». Antxon Belakortu, de EA, subrayó que «se sabía que todo era una tomadura de pelo».

Desahucio

Por otra parte, este asunto tiene su propio recorrido en los tribunales. Ahora se ha sabido que el juzgado de primera instancia número 3 de Vitoria ha ordenado juicio oral por desahucio el 15 de julio después

que la empresa Ibaiondo Renta Inmobiliaria presentara una demanda por finalización de arrendamiento y ha puesto fecha para el abandono de la casa, el 15 de setiembre.

La demanda del promotor se salta y oculta al juez, sin embargo, el núcleo del caso que es la existencia previa de un contrato de opción de compra que la pareja quiso hacer valer porque se trataba de viviendas unifamiliares con precio tasado, aunque tienen legalmente el precio libre desde el 3 de junio. «Una vez más el promotor demuestra que tan solo quería llegar a esta fecha para realizar su jugada. Se ríe de las indicaciones del Ayuntamiento», criticó el inquilino de la casa, Jorge Yrazu.